

9.3. ENTRE PAROS Y CACEROLAZOS: APUNTES SOBRE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA ARGENTINA RECIENTE

Leandro Gamallo¹

Introducción.

En el último Anuario del Conflicto Social (el correspondiente al año 2011), un breve análisis de Massimo Modonesi sobre “las luchas populares” latinoamericanas advertía sobre la tendencia desmovilizante que azotaba al conjunto de las organizaciones sociales que actuaban en países con “gobiernos progresistas” y lanzaba, al mismo tiempo, una esperanza sobre los pequeños brotes “removilizantes” que parecían surgir en dichos países. A partir de una periodización que identificaba un primer momento de quiebre del consenso neoliberal merced a la movilización popular y una posterior institucionalización de cambios progresivos gracias a victorias electorales de “candidatos, partidos y coaliciones progresistas”, según Modonesi, se estaría produciendo en la actualidad un tercer momento: “un proceso de disminución de la conflictualidad social y de des-movilización” (2011:253), acompañado de “una simultánea reactivación del conflicto y de re-movilización cuyas características hay que tratar de distinguir en sus formas incipientes” (Modonesi, 2011:253).

El presente trabajo interroga la caracterización del conflicto social durante esta última etapa a partir de una premisa teórica que consideramos fundamental: los análisis sobre conflictividad y movimientos sociales no pueden ignorar la relación entre la contienda social y el orden político que la configura y en el que tienen lugar dichos conflictos. A mitad de camino de los análisis que observan solamente las dinámicas internas de las organizaciones sociales y los factores

¹ Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO, México). Doctorando en Ciencias Sociales (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires). Contacto: leandrogamallo@gmail.com. Agradezco la minuciosa lectura y las sugerencias del Dr. Julián Rebón, el Lic. Uriel Erlich y el Lic. Nahuel Berguier. Cualquier error u omisión es de mi exclusiva responsabilidad.

que promueven la acción colectiva (poniendo el foco solamente sobre la sociedad civil) y aquellas investigaciones que sólo observan las instituciones del sistema político y sus reglas (posando la mirada sólo sobre el Estado), el enfoque desde el cual partimos pretende describir analíticamente los principales conflictos del año 2012 en Argentina a partir de su vínculo con las instituciones y el orden político que los posibilitan y al cual modifican también dinámicamente².

El año 2011 culminó en Argentina con una aplastante victoria de la oficialista coalición “Frente para la Victoria”, la cual consagró presidente de la república por un nuevo mandato a Cristina Fernández de Kirchner por una diferencia de casi el 40% de los votos³. La gran legitimidad del triunfo electoral consolidó, por un lado, las bases del orden político kirchnerista construido desde el año 2003, e hizo suponer la conformación de grandes consensos y disputas menores durante 2012.

Sin embargo, los conflictos sociales, lejos de menguarse, se han recrudecido. Tanto por la cantidad de participantes involucrados en las manifestaciones, como por los desafíos que le presentaron al gobierno, consideramos que las movilizaciones “autoconvocadas” conocidas como “cacerolazos” y las huelgas generales y movilizaciones organizadas por algunas de las centrales sindicales más fuertes se colocaron en el centro de la escena política argentina como los conflictos más importantes del año que pasó. Ambos tuvieron la característica de expresarse en diversas oportunidades a lo largo del año, con intensidades desiguales pero siempre mediante la acción colectiva contenciosa.

Estos episodios transcurrieron en una coyuntura caracterizada por un estancamiento económico y problemas en lo atinente a la necesidad de divisas en el marco de una fuerte crisis mundial. Debido a esta situación, el gobierno adoptó medidas económicas sumamente impopulares dentro de los sectores

² Un análisis empírico cualitativo que parte desde este punto de vista sobre el conflicto social argentino de los últimos años se encuentra en Muñoz (2010).

³ El Frente para la Victoria alcanzó el 54,11% de los sufragios, mientras que el inmediato perseguidor, Hermes Binner, del Frente Amplio Progresista, sumó el 16,81%.

medios, como el nuevo régimen de controles cambiarios que prácticamente impide la compra de moneda extranjera⁴. A ello hay que sumarle la creciente dificultad estatal para hacerle frente a una inflación elevada, la cual ha hecho estancar el crecimiento del salario real desde hace ya unos años.

Desde la dimensión política, los hechos contenciosos argentinos se enmarcan dentro del mapa de conflictos y tensiones que el gobierno sostiene con distintas organizaciones de la sociedad, como la Sociedad Rural Argentina (representantes de los productores agropecuarios más concentrados), la Iglesia Católica y buena parte de los representantes de la Comunidad Judía, una fracción de los sindicatos y movimientos sociales y, sobre todo, los principales medios de comunicación concentrados, quienes han tenido la capacidad de aglutinar bajo su agenda pública buena parte de las acciones opositoras⁵.

Así, pues, la hipótesis que guiará este trabajo sostiene que los niveles presentes de conflictividad social están asociados a la táctica desarrollada por las agrupaciones opositoras luego de su contundente derrota electoral. Trataremos de argumentar que las acciones de este híbrido conglomerado social (como vimos, conformado no sólo por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y corporaciones económicas), trasladaron (complementaron) el centro de operaciones desde el sistema político-institucional hacia la ocupación del espacio público, a partir de personificaciones variadas y reivindicaciones heterogéneas, pero con un trasfondo político común: una táctica de confrontación permanente hacia el *kirchnerismo*.

⁴ Los nuevos controles permiten la compra de divisas bajo condiciones sumamente particulares (entre otras, para el turismo fuera del país o para adquirir importaciones de artículos especiales) y sólo en cantidades limitadas, luego de pasar por trámites burocráticos engorrosos en las oficinas de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos.

⁵ Recordemos que la coalición oficialista aprobó, junto con otros partidos de la oposición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso Nacional en noviembre del año 2009. Según la nueva normativa, los conglomerados comunicacionales deberán adecuarse a los máximos de licencias de radio, televisión de aire, satelital y de cable, tanto a nivel nacional como local, que fija la nueva ley. Esto obligó a desprenderse de varias señales a los grupos más concentrados. Sin embargo, la presión de dichas corporaciones aun mantiene frenada la aplicación concreta de la ley por medio de distintas trabas judiciales y presiones políticas que se han ido desarrollando en estos años.

Partiendo de esta propuesta, en primer lugar haremos un breve repaso longitudinal de la conflictividad social argentina en las últimas décadas. La evolución de los principales conflictos, formatos de acción y actores contenciosos nos permitirá entender cabalmente por qué asistimos este año a “movilizaciones ciudadanas” de carácter regresivo y, simultáneamente, a la fuerte presencia de los sindicatos como un actor que pretende marcar su propia agenda en la política argentina.

En segundo lugar, caracterizaremos los dos conflictos en cuestión, centrándonos primero en las movilizaciones ciudadanas, tratando de echar luz sobre un fenómeno complejo y aparentemente espontáneo como los “cacerolazos”. Luego describiremos los episodios de conflictividad sindical, sus evoluciones recientes y las principales manifestaciones de protesta en el año que recientemente se fue.

Para terminar, esbozaremos unas reflexiones preliminares que nos ayuden a pensar la confluencia de estos episodios conflictivos aparentemente diferentes.

1) La evolución de los conflictos sociales argentinos.

1.1) Los años 90: declive sindical, fragmentación y desinstitucionalización.

La crisis orgánica del capitalismo argentino de finales de los 90 finalizó abruptamente con un estallido social y la desintegración del bloque histórico que había logrado conformar una coalición dirigente en torno a una hegemonía neoliberal. Las aciagas jornadas de diciembre de 2001 no sólo terminaron con el gobierno de Fernando De La Rúa, sino que inauguraron una nueva etapa político-económica en el país que algunos autores denominan como “progresista” (Modonesi, 2012; Mengo, 2009), “post-neoliberal” (Sader en Maneiro y Mera, 2011; Etchemendy y Collier, 2008), de la “post-

convertibilidad”⁶ (Varesi, 2010; Graña et al., 2008) o “neodesarrollista” (Félic, 2011; Katz, 2006; Svampa en Maneiro y Mera, 2011).

Más allá de las distintas conceptualizaciones⁷, sostenemos que la nueva etapa abrió un período de alianzas políticas inéditas, un ciclo económico ascendente sustentado sobre algunas rupturas y otras continuidades con respecto a la década anterior que permitió una política de ampliación de derechos luego de décadas de marginación y exclusión social. Allí donde el modelo económico neoliberal generaba desocupación, pobreza y vulnerabilidad social, el ciclo abierto luego en los primeros años del siglo XXI mostró un crecimiento económico sostenido con creación de empleo, relativa integración social y una progresiva redistribución del ingreso a través de la recuperación de los indicadores salariales, asignaciones estatales a los más desfavorecidos⁸ y la ampliación de derechos a un conjunto de sectores históricamente postergados (no sólo los económicamente marginados, sino también la expansión de libertades civiles como la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la desmonopolización de los medios de comunicación y la reforma del código civil, entre otras medidas).

Desde el punto de vista del conflicto social, los cambios se hicieron evidentes. Las distintas hegemonías políticas construidas generaron diversos tipos de conflicto en relación al orden económico-social que se proponían construir. En una sociedad con un alto porcentaje de desocupados, una distribución regresiva del ingreso y un fuerte avance del capital sobre el trabajo, la fuerza

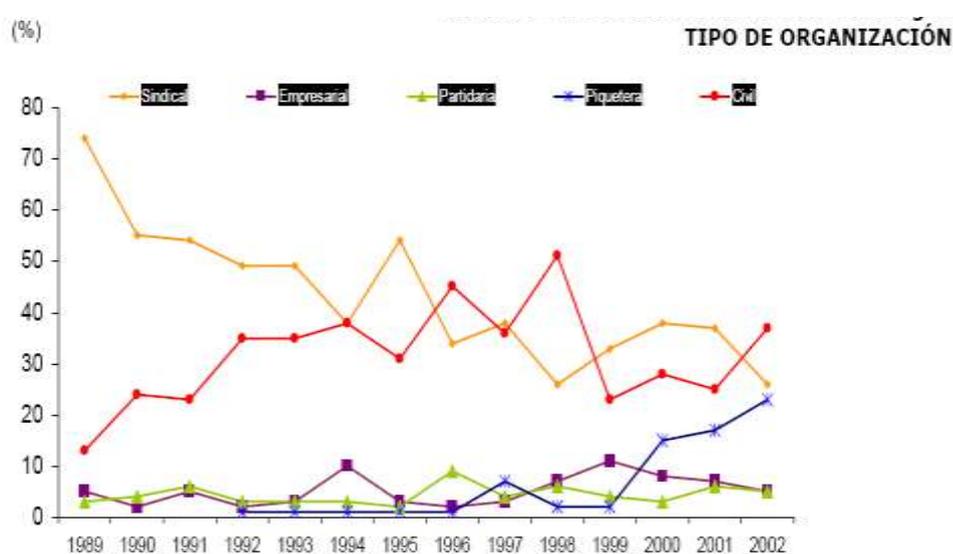
⁶ Se denominó convertibilidad al modelo económico impulsado por la presidencia de Carlos Menem durante la década del 90 que fijó la paridad legal entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Dicha ley fue derogada en enero de 2002 por la administración de Eduardo Duhalde.

⁷ No nos es posible aquí desarrollar las distintas discusiones sobre el carácter del modelo económico y la matriz estatal conformadas luego de la crisis del orden neoliberal sellada en diciembre de 2001. Si bien algunos estudios refuerzan las continuidades y otros resaltan las rupturas, casi todos ellos aceptan que el modelo de desarrollo típicamente neoliberal se agotó en diciembre de 2001 dando paso a otra etapa en la historia reciente de Argentina.

⁸ La política más conocida es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que fue implementada en 2009. Se trata de un programa social de alcance nacional que otorga un monto fijo de dinero a familias sin trabajo (y sin cobrar el subsidio a la desocupación) o con trabajo no registrado por cada hijo en edad escolar bajo la condición de que los responsables del niño se comprometan a mantener la asistencia escolar y respetar los controles médicos y la vacunación obligatoria del niño.

histórica de los sindicatos cayó estrepitosamente. Así, pues, teniendo en cuenta el tipo de organización que protagonizó los conflictos, los datos para la década del 90 muestran que el actor sindical fue perdiendo peso absoluto y relativo en el conjunto de las protestas sociales: mientras que en 1989 los actores sindicales llevaban a cabo el 74% del total de protestas, en 2002 sólo realizaban el 26%. Las organizaciones civiles⁹, por el contrario, tendieron a crecer hasta alcanzar el 51% de los reclamos en 1998 (Schuster et al., 2006. Ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Evolución de la protesta según tipo de organización (1989-2002).



Base: Total de protestas (n=5268)

Nota: para facilitar su lectura, el gráfico no incluye las categorías "Otros", "Demasiado vago para codificar", "Sin datos", "Multisectorial" y "Autoconvocados".

F

Fuente: Schuster et al., 2006

Las causas de la pérdida de peso sindical en los 90, en definitiva, fueron "consecuencia de la acelerada desregulación de la economía y del proceso de desmantelamiento del estado bienestarista argentino" (Schuster et al., 2006: 9). Por esta razón, "los sindicatos pierden notoriamente –al menos en su forma tradicional- su capacidad de intervenir en la determinación de las políticas

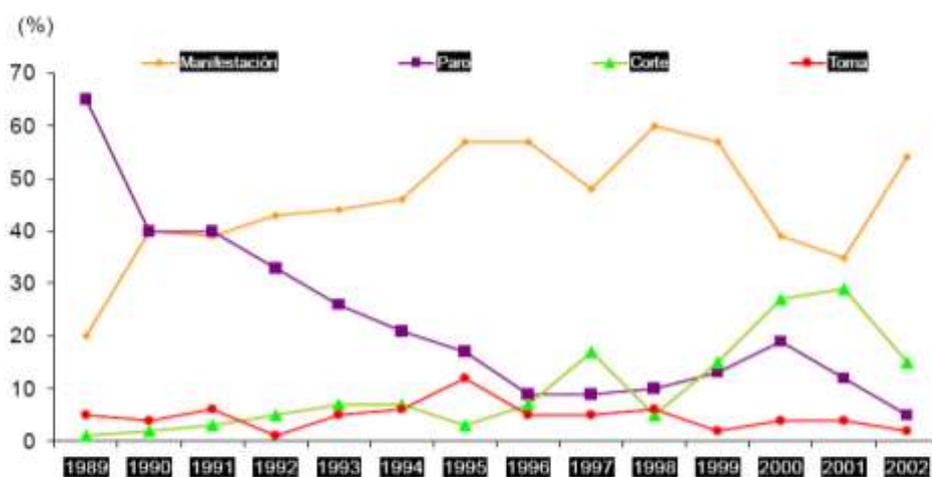
⁹ Los autores que elaboraron el registro (Schuster et al., 2006) incluyen dentro de los actores "civiles" a las organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, indígenas, de minorías sexuales, vecinales, etc.

públicas, en tanto se incrementa el poder de las corporaciones empresarias ligadas a los capitales transnacionales para influir en el rumbo de un régimen social de acumulación marcado por un carácter fuertemente regresivo en la distribución del ingreso” (Schuster et al., 2006: 9).

Por otro lado, la evolución histórica de los formatos de acción predominantes en las protestas mostró una modificación sustancial en las formas en que éstas se desarrollaron, algo que se conoció como el “nuevo repertorio de acción” de los movimientos sociales argentinos (Merklen, 2005¹⁰; Auyero, 2002, entre otros). El cauce predominantemente institucional que tenían las demandas en la década de los 80 dio paso a formas de acción extra-institucionales como el corte de calles, las tomas de edificios o los ataques violentos como saqueos, estallidos sociales o “puebladas”. Según se ve en el Gráfico 2, las huelgas obreras pasaron de representar casi el 70% de las formas de lucha en 1989 a menos del 10% en 2002, mientras que las manifestaciones o los cortes se convirtieron en el formato de protesta claramente mayoritario al final del período (Schuster et al., 2006).

Gráfico 2: Evolución de los principales formatos de acción (1989-2002)

VARIABLE MÚLTIPLE
(Total registros n = 5276)



Base: Total de protestas (n=5268)

Nota: El gráfico no incluye los valores de la categoría 'otros'.

¹⁰ Denis Merklen (2005) distingue al interior de ese nuevo repertorio cuatro tipos de acciones diferentes: los asentamientos, los piquetes, los estallidos y los saqueos.

Fuente: Schuster et al. (2006).

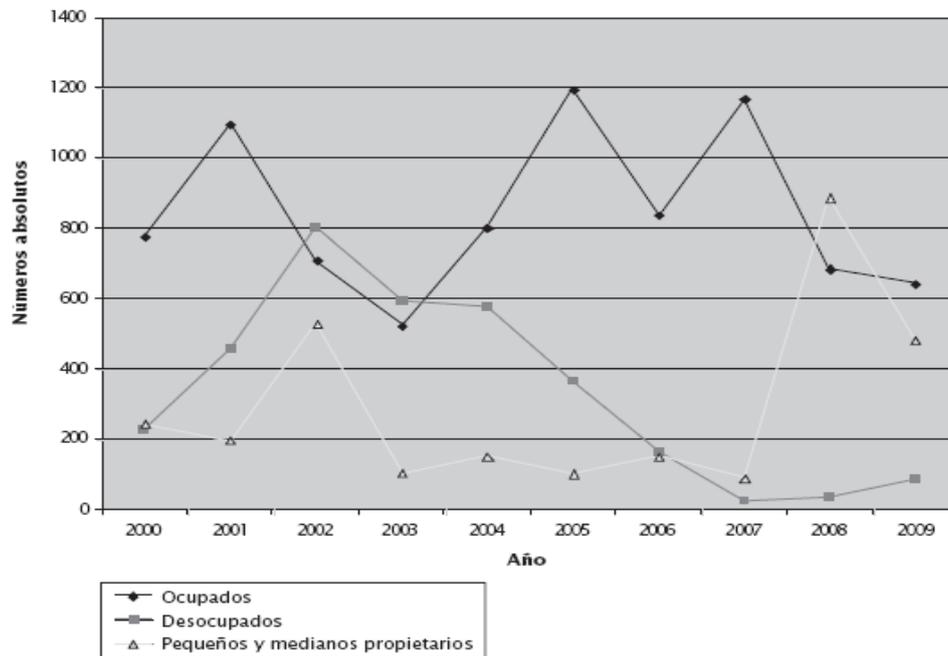
Así, pues, el carácter excluyente de la estructura social argentina de los años 90 hizo que las principales formas de organización se canalizaran por fuera de las instituciones. La expulsión constante de trabajadores del mercado laboral y su imposibilidad estructural de inclusión hizo que las estrategias de protesta fueran al margen del orden legal y político. Por esta razón, “si se compara la proporción de manifestaciones con la de huelgas puede inferirse que, en el período de relevamiento, la protesta se ha orientado más hacia el espacio público que hacia la puja corporativa y la representación de intereses”. (Schuster et al., 2006: 36).

En conclusión, la protesta social argentina durante los 90 pasó de ser acentuadamente corporativa, institucional y relativamente homogénea a ser de carácter más general, por fuera de las instituciones y marcadamente fragmentaria.

1.2) La conflictividad en el siglo xxi: recuperación sindical y “movilizaciones ciudadanas”.

Como ya hemos señalado, la salida de la convertibilidad y el cambio en el modelo económico abrieron una nueva etapa en la caracterización de los conflictos sociales argentinos. A partir del año 2003 las tendencias observadas comenzaron a revertirse, observándose una acelerada recuperación de la fuerza sindical para llevar adelante los principales conflictos de la época. Lejos de “la muerte del sindicalismo” vaticinada por varios analistas, el nuevo patrón de acumulación de capital, sustentado en un crecimiento del consumo y el mercado interno, propició el rearme de los trabajadores para discutir, en este caso, la distribución de la riqueza social en el país. Así, pues, la evolución de los principales protagonistas de acciones contenciosas del período 2000-2009 muestra otra vez a los trabajadores en el centro de la escena (Rebón et al., 2010. Ver Gráfico 3).

Gráfico 3: Evolución de las acciones de lucha de las tres principales personificaciones sociales¹¹ (2000-2009)



Fuente: Rebón et al. (2010).

La gran novedad del período fue, sin embargo, la aparición de acciones de protesta protagonizadas por propietarios de unidades productivas. Hacia el año 2008 se produjo un intenso enfrentamiento entre organizaciones representantes de productores agropecuarios y el gobierno nacional, quien había lanzado un aumento en los impuestos de exportación en los principales productos agrícolas. La protesta de las cámaras patronales surgió primero a través de lockouts (cese de comercialización de los productos, generando conatos de desabastecimiento), luego a través de cortes de rutas estratégicas a nivel nacional. Por esta razón, en ese año las acciones públicas de estas organizaciones superaron en número a las de los trabajadores ocupados y las de los desocupados.

Así, pues, dos de los actores principales de las protestas del período fueron los sindicatos y las cámaras patronales¹², con formatos predominantes diferentes:

¹¹ A diferencia de Schuster, el estudio de Rebón y su equipo no distingue entre organizaciones que protagonizan los conflictos, sino entre la inserción de los actores en el mercado laboral (ocupados, desocupados, propietarios, etc.).

institucionales, en el caso de los sindicatos (huelga); mediante la acción directa¹³, en el caso de las corporaciones patronales (cortes de ruta).

Los episodios de conflictos protagonizados por propietarios, por un lado, dan cuenta del escaso margen de influencia que el nuevo orden político les otorga a corporaciones acostumbradas a intervenir de maneras mucho menos contenciosas en el sistema político y las políticas públicas¹⁴. El hecho de que actores “ocultos” salieran a la escena pública a través de movilizaciones y cortes de calles mostró abiertamente que sus intereses se vieron relativamente afectados y que los canales de influencia típicos ya no los representan.

Pero además, las movilizaciones del “Campo” (como se conoció al frente de cámaras empresarias que confrontó con el gobierno por esos años) estuvieron estrechamente relacionadas no sólo con la defensa corporativa de intereses sectoriales, sino también vinculadas a una ofensiva conservadora por reestructurar el orden político y el modelo económico¹⁵. El éxito de aquellas convocatorias residió precisamente en poder articular y aglutinar a un conjunto heterogéneo de grupos sociales, sectores económicos y fracciones políticas disconformes con el gobierno que encontraron una oportunidad política para salir a manifestar su malestar. Uno de los indicadores de esa articulación exitosa fue la aparición de “movilizaciones ciudadanas” masivas, concentraciones de individuos sin filiación organizativa movilizadas para protestar contra el gobierno y manifestar su apoyo al “Campo”¹⁶. Dichas movilizaciones constituyen un precedente directo de los cacerolazos de 2012,

¹² Remarcamos que se trata de los *principales* actores y no los únicos. Las organizaciones piqueteras, campesinas, estudiantiles y ambientalistas, entre otras, fueron una gran fuente de conflicto social en estos años también

¹³ La acción directa se define como “formatos de acción contenciosos que no se encuentran mediados por la institucionalidad dominante” (Rebón, 2009).

¹⁴ Recordemos que “propietarios y sectores patronales han acudido tradicionalmente a estrategias de presión que pocas veces requirieron de la acción pública de protesta para obtener un acceso privilegiado al poder político. Gracias a las tradicionales mediaciones del lobby empresario, y la potencial amenaza de recurrir a instrumentos más radicales como la desestabilización económica, los empresarios se han ahorrado en gran medida de la necesidad de recurrir a la movilización y la participación activa de su ‘base social’, en general refractaria a este tipo de activismo” (Accorinti et al., 2008).

¹⁵ Más allá del reclamo puntual, las movilizaciones agropecuarias discutieron la capacidad general y la legitimidad del Estado de intervenir en la economía.

¹⁶ “Cacerolazo contra Cristina Kirchner en todo el país” (*Perfil*, 26.03.2008). En línea http://www.perfil.com/contenidos/2008/03/25/noticia_0050.html [consultado el 22.01.2013]

en la medida en que dejaron en la memoria de un sector de la población la posibilidad de salir al espacio público a reclamar por un orden político al que consideran injusto e ilegítimo.

A la par que se movilizaban miles de ciudadanos en apoyo al frente agropecuario contra el gobierno, decenas de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares expresaron su apoyo a la medida impositiva y al gobierno. Los sindicatos (en particular la fracción que luego se distanció del kirchnerismo) jugaron un importante papel al convocar a miles de trabajadores a las calles y disputar el espacio público frente las movilizaciones opositoras.

Es precisamente la renovada fuerza sindical otro de los principales rasgos de la conflictividad del período. El “resurgimiento sindical” estuvo asociado a la capacidad obrera de recuperar el poder adquisitivo luego de una fuerte caída durante la crisis de 2001-2002, años en los que los trabajadores vieron caer su salario real en un 25% (Graña y Kennedy, 2009:47). El crecimiento económico sostenido, junto con un fuerte impulso a la expansión del mercado interno y el empleo (formal e informal) hicieron que se reincorporara de manera creciente a grandes contingentes de desocupados al mercado laboral argentino (muchos en condiciones de precariedad). Esta nueva tendencia estructural otorgó mejores condiciones para negociar a los sindicatos, situación que se vio fortalecida por la política gubernamental de favorecer la negociación del salario a través de la institucionalización de los Convenios Colectivos de Trabajo¹⁷.

Este nuevo patrón de negociaciones tripartitas (obreros, patrones y Estado) fue denominado como “neocorporativismo segmentado”, en tanto se trata de “una modalidad de negociaciones a nivel de cúpulas en las cuales sindicatos, de carácter monopólico, asociaciones empresarias y el gobierno pactan un salario mínimo general y salarios sectoriales acordes a las metas de inflación, que se aplican sólo a una minoría sustancial de la fuerza de trabajo” (Etchmendy y Collier, 2008:149). El carácter segmentado de este nuevo modelo corporativista

¹⁷ El ministerio de trabajo pasó de homologar la firma de 87 convenios colectivos en el tercer trimestre de 2004 a registrar 431 acuerdos en el tercer trimestre de 2012, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Un aumento del 406%.

se basa en que el nuevo factor de poder y negociación sindical reside principalmente en el sector registrado de la economía, dejando de lado a la gran masa de trabajadores que aún permanece en condiciones precarias en el sector informal.

Así, pues, los otrora débiles sindicatos argentinos recuperaron su poder social y comenzaron a exigir mayores recomposiciones salariales, en el marco de presiones inflacionarias ascendentes. Esta espiral de suba de precios, reclamos gremiales y aumentos de salarios es la que, en parte, ha generado una dinámica laboral altamente conflictiva, apuntalada además en los altos niveles de autonomización del movimiento sindical, que no se subordinó orgánicamente al gobierno nacional. A diferencia de otras experiencias en Latinoamérica (y a diferencia, incluso, de otros períodos históricos en Argentina), “el grueso del movimiento sindical en los últimos años (...) ha sido relativamente autónomo del Estado, ejerciendo a menudo presión sobre los salarios y alentando la movilización sin la aprobación del gobierno” (Etchemendy y Collier, 2008:148).

Esta ofensiva gremial redundó progresivamente en mejores indicadores salariales, así como en el logro de mejores condiciones para el movimiento obrero argentino y sus organizaciones colectivas. Sin embargo, las conquistas salariales y laborales obtenidas en los Convenios Colectivos alcanzaron a cubrir solamente a los trabajadores empleados en el sector registrado de la economía. En este sentido, “los sindicatos argentinos propician *cierto nivel* de igualdad en tanto ayudan a los trabajadores formales a cosechar los beneficios del reciente beneficio económico, pero esos beneficios permanecen confinados principalmente a esos trabajadores registrados, fortaleciendo la brecha entre quienes están afuera y adentro del sector formal del mercado de trabajo” (Etchemendy y Collier, 2008:149).

Esta vertiginosa reconstrucción del poder sindical, en alianza con el gobierno pero conservando autonomía con respecto a él, tuvo su correlato en el sistema político argentino. Sustentado en una historia de participación activa en el

movimiento peronista y, a través de él, en el Estado; el sindicalismo en Argentina no sólo remite en la negociación típica entre capital y trabajo, sino también a la capacidad obrera de instalarse con fuerza como un actor más en el escenario político. Ya en la salida de la crisis del neoliberalismo argentino, la principal central obrera (la Confederación General del Trabajo, CGT) fue parte activa de la conformación de la coalición gobernante que en los últimos 10 años encabezó el kirchnerismo. En ese marco de alianzas, los sindicatos obtuvieron no sólo mejoras gremiales, sino también “beneficios organizacionales y particularistas: cambios pro-sindicales en la legislación laboral, designaciones en la agencia estatal que supervisa el funcionamiento del sistema de obras sociales controlado por los sindicatos y beneficios particulares dirigidos hacia los sindicatos más grandes” (Etchemendy y Collier, 2008:149).

De este modo, el sindicalismo argentino ha convivido con la tensión de ser un protagonista decisivo dentro de la fuerza gobernante (ocupando puestos específicos en su interior) y, al mismo tiempo, de conducir gremialmente los reclamos de los trabajadores, roles que no siempre se complementaron armónicamente. Dichas tensiones, aunadas a condimentos políticos inherentes al movimiento peronista, se recrudecieron en los últimos años y terminaron con la ruptura política entre una parte importante del movimiento obrero que se alejó del gobierno y otra facción que se mantuvo oficialista.

Más allá de las causas estrictamente sindicales de la ruptura (reivindicaciones evidentemente legítimas como el retraso salarial, el mantenimiento de impuestos regresivos a salarios medios y altos de trabajadores registrados, entre otros), es imposible entender esta reciente enemistad sin atender a la dinámica política del peronismo, las luchas entre distintas facciones del movimiento y el rol específico que el sindicalismo juega en esa geografía política. En este marco complejo de tensiones, correlaciones de fuerza y consensos frágiles al interior del gobierno, una parte del sindicalismo pretendió acceder a mayores cuotas de poder dentro de la alianza gobernante y, a través de ella, dentro del Estado. Sin embargo, la conducción del gobierno desatendió

estas demandas y fue quitando cada vez más puestos y recursos del Estado a la rama sindical del movimiento, la cual se sintió disminuida y terminó por alejarse. En este contexto, asistimos en 2012 a la aparición de huelgas generales y movilizaciones masivas que, con algunas demandas específicas del movimiento obrero, se enmarcan en luchas intrínsecas por acumular poder dentro del sistema político argentino.

2) Cronología de los principales conflictos durante 2012 en Argentina.

2.1) Las movilizaciones ciudadanas de 2012: los cacerolazos.

Desde fines de mayo hasta la última gran convocatoria del 8 de noviembre se multiplicaron en varios centros urbanos del país movilizaciones que reunieron, con distinta intensidad, a individuos con diversos reclamos al gobierno nacional. Con el recuerdo todavía vivo de las jornadas de “la crisis de 2001” y las ya mencionadas protestas de 2008, los participantes expresaron su malestar con el gobierno mediante un repertorio instalado muy fuertemente en la memoria colectiva de la ciudadanía argentina: la movilización en la vía pública acompañada de algún ruido provocado generalmente por el golpe a cacerolas. Los *cacerolazos*, recordemos, aparecieron como un método generalizado de protesta durante la crisis política de diciembre de 2001 que culminó con la salida del por entonces presidente Fernando De La Rúa¹⁸. Método preferido por la clase media pauperizada, los cacerolazos se aunaron en ese contexto a los *piquetes* desarrollados por la gran masa de desocupados urbanos que había dejado el derrotero neoliberal. Así, pues, la consigna “piquete, cacerola; la lucha es una sola” expresó la alianza que los sectores populares cada vez más marginalizados y los sectores medios empobrecidos concertaron frente a la peor crisis económico-social de la historia argentina. Sin embargo, como hemos visto, luego de 2001 el ruido de las cacerolas representó la adhesión de las clases medias urbanas a las protestas

¹⁸ Por otra parte, el primer gran cacerolazo del que se tenga memoria en Latinoamérica se produjo por parte de los sectores acomodados chilenos frente al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.

agropecuarias durante el año 2008, siendo el método preferido de protesta de sectores de la población que no se identifican con el gobierno nacional.

A mediados de 2012, individuos sin afiliaciones políticas explícitas (de allí el mote de “ciudadanos”) comenzaron a convocarse principalmente a través de las redes sociales para *cacerolear*, es decir, mostrar su inconformidad con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las primeras concentraciones se dieron exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, agrupándose en algunas esquinas particulares, todas pertenecientes a barrios en los que residen los sectores más acomodados de la ciudad. Las últimas, sin embargo, fueron masivas, se produjeron en prácticamente todos los centros urbanos importantes del país y registraron niveles de organización ascendentes, incluyendo movilizaciones a edificios públicos (Ver Tabla 1 con cronología de hechos).

Dichas protestas fueron organizadas principalmente a través de las redes sociales y fueron presentadas como “espontáneas” y “apartidarias”, resaltando el carácter ciudadano de su composición. Sin embargo, el hecho de que las protestas fueran principalmente convocadas y difundidas mediante las redes sociales con varios días de anticipación (incluso meses) revela precisamente que no se trató de acciones colectivas “espontáneas”. Contrariamente, expresa la voluntad de ciertos sectores organizados de promover este tipo de acciones en fechas elegidas intencionalmente y difundidas de manera estratégica en algunos espacios comunicacionales clave.

Más allá del carácter heterogéneo de las identidades políticas y sociales presentes, las movilizaciones estuvieron protagonizadas sobre todo por sectores medios, medios-altos y altos de las grandes ciudades, que no tienen una afiliación política, sindical ni de ninguna otra índole. A pesar de no identificarse con ninguna agrupación política en particular y de la gran heterogeneidad de los reclamos presentados, lo que parece aglutinar a la gran mayoría de los participantes y adherentes a las protestas es su orientación opositora al gobierno nacional. Una encuesta realizada en los principales

centros urbanos en los días inmediatamente posteriores al cacerolazo del 8 de noviembre reveló que sólo el 1,6% de los adherentes a los cacerolazos (32,3% de los encuestados) afirmó haber votado a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de octubre de 2011 (EQUIS, 2012)¹⁹.

En cuanto al formato de las acciones, en todos los sucesos contenciosos los participantes se concentraron en algún punto previamente acordado, manifestándose aplaudiendo, golpeando objetos ruidosos y, algunos de ellos, portando pancartas con consignas variadas. Algunas de las principales consignas y temáticas registradas fueron: la inseguridad, la falta de diálogo, la corrupción, el rechazo ante una posible reforma constitucional que habilite la reelección y los controles a la compra de moneda extranjera, entre otras (Kollman, 2012). Más allá de éstas, también se esbozaron algunas demandas en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por la creciente inflación y un aumento de las jubilaciones equivalente al 82% de los salarios.

Luego del impacto de las primeras movilizaciones de junio, que se realizaron de forma semanal consecutiva, los cacerolazos perdieron su fuerza hasta reinstalarse en la escena política a partir de dos hechos de masas: la jornada del 13 de septiembre y la movilización del 8 de noviembre.

La protesta del 8N, como se empezó a conocer en los medios, tuvo un gran impacto público, en la medida en que contó con la participación de decenas de miles de personas en todas las ciudades grandes del país, consiguiendo aumentar considerablemente la cantidad de participantes con respecto a las anteriores. Allí se hizo evidente la gran organización detrás de las protestas, reflejada en una coordinación difícilmente alcanzable por ciudadanos “autoconvocados”: la colocación de carteles públicos en las calles, la presencia de oradores y equipos de sonido que difundían algunas canciones (como el himno nacional) y hasta la proyección de consignas en monumentos públicos

¹⁹ Según marca el informe, para la elaboración de la encuesta “se utilizó el método interaccional a través de entrevistas personales mediante la aplicación de un cuestionario semiestructurado diseñado adhoc (...) Para la selección de los entrevistados, entonces, se aplicó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio polietápico...” (EQUIS, 2012).

como el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires. En pocas palabras, lo que se hizo evidente en esta última concentración fue la *movilización de recursos* puestos en juego en su concreción, por lo cual, para algunos analistas, dicha protesta habría dejado de ser un *cacerolazo*, “si se toma el término como sinónimo de espontaneidad” (Kollman, 2012).

Más allá del grado de organización, estas dos últimas movilizaciones fueron exitosas, si tenemos en cuenta un criterio cuantitativo en el nivel de participación. Sin embargo, como reflejan los datos de la encuesta mencionada, los cacerolazos masivos no pudieron interpelar a fracciones sociales y políticos alternativas, en la medida en que no ampliaron su convocatoria a sectores populares y grupos políticos afines al gobierno nacional: su crecimiento no fue cualitativo. En el éxito de las jornadas (la gran capacidad de aglutinamiento de un arco opositor heterogéneo) encontramos también sus evidentes limitaciones: las protestas no penetraron sobre el 54% de la población que votó al gobierno de Cristina Fernández.

En la medida en que la convocatoria y difusión de estas acciones se realizó predominantemente por redes sociales, algunos analistas han querido ver en los cacerolazos una versión sudamericana de la primavera árabe o el movimiento de la Indignación europeo. Sin embargo, creemos que la clasificación de estos hechos como un “movimiento social de ocupación en red”, tal como ha definido Castells (2012) a la “primavera árabe” y al movimiento de los Indignados en Europa y EEUU, es artificial. Si bien es cierto que comparten con estos episodios el hecho de generarse en los medios virtuales de comunicación y, en ese sentido, su difusión es más de carácter horizontal, los cacerolazos argentinos no son “movimientos espontáneos e instantáneos que se inician como resultado de una explosión de la indignación subyacente en la sociedad” (Castells, 2012: 12). En la medida en que la gran mayoría de los hechos contenciosos contaron con una premeditación explícita, no se trató de reacciones instantáneas, sino de hechos políticos convocados, organizados y fomentados con una planificación indiscutible por líderes de la oposición y, sobre todo, los medios de comunicación concentrados. El

permanente acicate mediático alrededor de estas protestas demostró que los multimedios opositores poseen la capacidad de articular a la gran mayoría de las distintas facciones opositoras detrás de su propia estrategia política²⁰.

Por otro lado, si bien los cacerolazos tampoco contaron con la presencia de un liderazgo formal, no fueron movimientos asamblearios que fomentaron la auto-organización. Es decir, no se trata de organizaciones en las que “el poder de decisión está en las asambleas soberanas de cada ocupación y la puesta en práctica de las decisiones se hace en comisiones constituidas a partir de la participación voluntaria de personas en movimiento” (Castells, 2012: 17). Dado que los cacerolazos argentinos expresaron una voluntad opositora muy clara que prácticamente no incluyó demandas propositivas concretas, la ausencia de liderazgos político-partidarios en las protestas debe leerse más como un déficit que expresa la escasa capacidad de articulación de los partidos opositores y no como una decisión autónoma de los colectivos que protestan. Así, pues, las movilizaciones ciudadanas no sólo expresan la disposición de un sector social opositor para salir a la calle a expresar su malestar, sino también la escasa capacidad articuladora de una oposición política débil que ni siquiera pudo capitalizar este descontento.

En este sentido, los cacerolazos tampoco comparten con los “movimientos sociales de ocupación en red” la gran legitimidad que estos tienen²¹. En tanto que expresan mayoritariamente el malestar de parte importante de los sectores medios y medios-altos, las protestas parecen interpelar a un sector importante de la sociedad, pero escindiéndolo de otro conjunto grande que se considera afín al kirchnerismo. Si las manifestaciones de indignados expresaban una polarización entre la ciudadanía indignada y los gobiernos (transformándose en una crisis de representación del sistema político), los cacerolazos más bien

²⁰ Para mensurar el rol de los medios en la difusión de las protestas, ver Dillenberger (2012).

²¹ “La mayoría de los movimientos alcanzan una amplia legitimidad social en términos de la justicia de su protesta. La opinión pública en todos los países encuestados señala su acuerdo con las críticas del movimiento, en particular en lo referente a la falta de democracia real, a la corrupción de los partidos políticos y a la colusión entre la industria financiera, especulativa y explotadora y el sistema político a su servicio.” (Castells, 2012: 14).

refuerzan la polarización social entre quienes apoyan masivamente al gobierno y quienes no lo toleran.

En definitiva, las movilizaciones ciudadanas no serían más que la reacción colectiva de un grupo social y político que nunca se vio interpelado por las políticas del gobierno. El hecho de que ese malestar ahora se exprese y canalice activamente mediante la acción colectiva es un dato a tener en cuenta para el futuro desarrollo del conflicto social argentino. En 2012 quedó demostrado que los cacerolazos están evidentemente en la caja de herramientas de un sector de la población a la hora de reclamar.

Tabla 1: Cronología de Cacerolazos en 2012

31 de mayo	Vecinos de los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires se convocaron a horas de la noche en algunas esquinas de la ciudad con cacerolas. Algunas de las consignas eran el repudio a la corrupción, quejas por la inseguridad y la traba a la compra de divisa extranjera, entre otras. El hecho de que se hubiera convocado a otra movilización para el día siguiente hace suponer que ésta buscó tener un efecto de propaganda para sumar a más gente el día posterior.
1 de junio	Al igual que el día anterior, vecinos de las zonas más acaudaladas de la ciudad (al parecer en mayor número) protestaron contra el gobierno alrededor de las 22hs. La convocatoria a ambas jornadas se organizó a través de las redes sociales, como lo demuestran algunos “flyers” ²² . Medios opositores afirman que es un “suceso que hizo recordar a las protestas ocurridas durante 2008, en pleno auge del conflicto entre el Gobierno y el campo” ²³ .
7 de junio	Por tercera vez en una semana, grupos de personas se concentraron en las mismas esquinas para aplaudir, golpear cacerolas y exhibir pancartas con críticas al gobierno. Esta vez, un grupo nutrido (según algunos medios, cerca de 1000; para otros, unos 6000) se dirigió

²² Consultar: <http://twitpic.com/9r0pyv>

²³ “Otro cacerolazo de protesta en varios barrios de la Capital” (*Clarín*, 01.06.2012). En línea: http://www.clarin.com/politica/cacerolazo-protesta-varios-barrrios-Capital_0_710929143.html [consultado el 22.01.2013].

	a la Plaza de Mayo, epicentro de las protestas sociales en Argentina.
14 de junio	Por tercer jueves consecutivo (las movilizaciones se empezaron a llamar “marchas de los jueves”), se convocó a una nueva movilización directamente en Plaza de Mayo, aunque en otras esquinas se vieron vecinos con cacerolas. La asistencia fue sensiblemente menor que en las anteriores concentraciones.
3 de septiembre	Luego de varias semanas sin movilizaciones, decenas de personas salieron a golpear cacerolas en algunas esquinas ya emblemáticas de los barrios más acaudalados de la ciudad de Buenos Aires (Santa Fe y Callao) mientras la presidente Cristina Fernández hablaba por Cadena Nacional (obligando a todas las emisoras a transmitir su discurso).
13 de septiembre	Masiva protesta organizada con antelación por algunos grupos virtuales (páginas de internet, blogs, etc.) aparentemente apartidarios, pero “antikirchneristas” ²⁴ . La protesta contó, sin embargo, con el apoyo explícito de los referentes de oposición principales. Por primera vez, la convocatoria tuvo eco a nivel nacional, observándose grandes concentraciones de personas en ciudades importantes como Córdoba, Rosario, Mar Del Plata, Mendoza y Salta, entre otras. Las consignas, marcadamente heterogéneas fueron, entre otras, “No a la re-reelección”, “No a la corrupción”, “No al cepo cambiario”, “Justicia independiente”, “defensa de las instituciones”, etc. Algunos medios afirmaron que se movilizaron unas 200.000 personas en todo el país.
8 de noviembre	Movilizaciones de miles de personas en todas las ciudades importantes del país redondearon la jornada más convocante del año. La premeditación y coordinación de las acciones otorgó a la protesta un alto grado de organización: la convocatoria se realizó con varias semanas de anticipación y se difundió por redes sociales y medios tradicionales. Hubo presencia de carteles espectaculares en las calles, oradores en los actos y movilizaciones a lugares públicos. Las consignas fueron similares a la convocatoria anterior, al igual que el perfil social de los asistentes.

²⁴ “Convocatoria a una marcha antikirchnerista”, *La Nación*, (13.09.2012). En línea: <http://www.lanacion.com.ar/1507971-convocatoria-a-una-marcha-antikirchnerista> [Consultado el 22.01.2013].

2.2) Los conflictos político-sindicales.

En 2012 asistimos también a un recrudecimiento de los conflictos sindicales. Como hemos afirmado más arriba, la fuerza de las comisiones internas sindicales y su capacidad gremial de presionar por aumentos salariales se hizo cada vez más evidente desde 2003 a la fecha. Lo que ocurrió en el año 2012, sin embargo, trascendió los reclamos meramente sectoriales, en la medida en que se trató de impugnar el rumbo político del gobierno del Estado. En este sentido, las protestas sindicales más significativas del año pasado fueron *de carácter político*, es decir, eventos contenciosos protagonizados por asociaciones sindicales cuyo destinatario era el gobierno del Estado y no una patronal puntual.

Así, pues, el año 2012 representó un quiebre fundamental en la política de conflictos desarrollada por algunos de los gremios más importantes del país. La ruptura de la alianza entre el principal sector de los trabajadores (la Confederación General del Trabajo –en adelante CGT, conducida por Hugo Moyano) y la coalición gobernante es la expresión de ese giro en el rumbo de una parte importante de los sindicatos argentinos.

Como mencionábamos más arriba, el sindicalismo peronista, se constituyó históricamente como una fracción más del movimiento político y siempre reclamó un lugar dentro del Partido Justicialista (en adelante, PJ), detentando cargos de poder. Dentro de ese paradigma, la fracción sindical conducida por Moyano (históricamente opositora a los gobiernos neoliberales) fue parte del kirchnerismo desde sus orígenes, ocupando cargos, recibiendo recursos y asegurando una base social importante de apoyo a un gobierno que asumió con un porcentaje menor de votantes en el año 2003. El momento de mayor fortaleza de esa alianza probablemente haya sido el importante accionar sindical repudiando y disuadiendo algunas de las principales manifestaciones del año 2008, en plena crisis política del gobierno durante el mencionado conflicto con las corporaciones agropecuarias.

Desde el 2011, sin embargo, comenzaron a vislumbrarse importantes tensiones entre la CGT y el gobierno, tensiones que tuvieron lugar en la conformación de las listas de candidatos en los distintos ámbitos legislativos y ejecutivos, tanto locales como nacionales. La demanda de la CGT se sostenía en que se estaba relegando al sector sindical dentro de la estructura oficial. Lejos de atender el reclamo, el gobierno promovió un cambio en su política de alianzas, virando desde los sectores más tradicionales del peronismo (sindicatos, dirigentes históricos del partido y algunos líderes provinciales, entre otros) hacia nuevas agrupaciones juveniles, estudiantiles y organizaciones sociales nuevas que pretenden desmarcarse de la tradición conservadora del PJ.

En verdad, desde el repliegue sufrido en los años 90, hace años que el sindicalismo no detenta la misma capacidad de poder dentro del peronismo, fenómeno que se conceptualizó como “desindicalización” del partido (Levitsky, 2003). Durante el kirchnerismo dicha situación no se revirtió, dado que los sindicatos “han sido incapaces de reanudar el antiguo patrón de inserción en la arena partidaria desde una posición central. Esto es, ya no poseen un lugar en las listas electorales o en la estrategia electoral del PJ a nivel nacional” (Etchemendy y Collier, 2007: 187). Es precisamente esa inserción subordinada la que parte del sindicalismo pretendió transformar, en un comienzo, tensionando la relación con el kirchnerismo (demandando más recursos y cargos de poder) y, finalmente, alejándose definitivamente del gobierno y conformando su propio partido político, en la búsqueda de alianzas con sectores del peronismo que se mantiene opositor²⁵.

Así, pues, en los primeros meses de 2012 se completó el quiebre definitivo de la alianza y una fracción importante de la CGT se ubicó definitivamente como un actor político claramente opositor, poniendo en cuestión el modelo

²⁵ “Moyano quiere un frente para 2013” (*La Nación*, 12.10.2012). En línea: <http://www.lanacion.com.ar/1516459-moyano-quiere-un-frente-para-2013> [consultado el 22.01.2013]. Ver también: “Moyano saldrá a la caza de afiliados para su partido” (*La Nación*, 31.12.2013). En línea: <http://www.lanacion.com.ar/1541800-moyano-saldra-a-la-caza-de-afiliados-para-su-partido> [Consultado el 22.01.2013].

“neocorporativista segmentado” que ha caracterizado a la conflictividad sindical durante los años previos.

En este contexto, el gobierno reagrupó a los sindicatos afines y propició la fractura de la Central Sindical, que se dividió según las lealtades al gobierno. Esto configuró un escenario obrero fragmentado, conformado por cinco centrales sindicales distintas. En el transcurso de menos de 10 años, los trabajadores pasaron de tener dos grandes centrales (CGT y CTA, la Central de Trabajadores Argentinos) a tener cinco organizaciones: tres desprendidas de la CGT (hace unos años ya se habían ido algunos sindicatos opositores al gobierno, conformando la “CGT Azul y Blanca”) y dos desprendidas de la CTA (fractura que ya se había dado en 2010, también en función de la adhesión al gobierno o la oposición a él).

Esta atomización sindical no evitó que las tres facciones opositoras (dos facciones de la CGT y una de la CTA) lograran articular acciones comunes durante todo el año, sobre todo a partir de la mencionada ruptura protagonizada por el poderoso dirigente camionero Hugo Moyano. De este modo, se produjeron por primera vez durante un gobierno kirchnerista, convocatorias a huelgas generales y grandes movilizaciones opositoras del movimiento obrero. Luego de una primera acción conjunta el 27 de junio, se sucedieron al menos otras tres más de magnitud considerable, llegando el 20 de noviembre a lograr paralizar las actividades de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades importantes (Ver Tabla 2 con cronología de hechos).

Las acciones contenciosas de los sindicatos opositores pretendieron cada vez más capitalizar el descontento expresado en los cacerolazos que se sucedían casi simultáneamente a ellas (sobre todo en la última protesta del 19 de diciembre). De este modo, el viraje político de la CGT opositora quedó claro: si en 2008 actuaba para repudiar los cacerolazos de sectores medios, en 2012 intentó interpelar a dichos individuos y sumarlos a las protestas contra el gobierno, adquiriendo consignas cada vez más heterogéneas como la preocupación por la “inseguridad” o la crítica a la ley de desmonopolización de

medios de comunicación que fue aprobada por el Congreso e impulsada por el gobierno.

Más allá de las intencionalidades de los dirigentes, los participantes de las jornadas de lucha sindical fueron la contracara de los “ciudadanos” de los cacerolazos: si en éstos primó la presencia de individuos desafiliados, es decir, sin ninguna pertenencia gremial, social o política; en las huelgas y movilizaciones obreras asistieron casi con exclusividad los trabajadores de los gremios que las convocaban y los militantes de las agrupaciones que adhirieron a las medidas. Esta incapacidad de trascender el “mundo sindical” dio cuenta de la dificultad de los dirigentes gremiales para sumar voluntades por fuera de las fronteras laborales, por más que pregonaran consignas más inclusivas.

Las reivindicaciones concretas de las medidas de fuerza tuvieron generalmente un carácter progresivo, tendiente a reclamar un mayor y mejor reparto de la riqueza nacional. Las demandas de eliminación del impuesto a los salarios más elevados (o el aumento en el monto máximo exento de impuestos), la exigencia de universalización de las asignación por la cual los trabajadores cobran un monto por hijo²⁶, el aumento de las jubilaciones y la exigencia de frenar la inflación constituyen reclamos importantes de los trabajadores argentinos que tienden a mejorar la redistribución social de la riqueza a favor de los más necesitados.

Sin embargo, el conflicto estrictamente político de fondo tiene que ver con la fractura señalada de la alianza entre un sector obrero con pretensiones de poder y un gobierno que no pretende ceder espacios al movimiento obrero peronista. A pesar de golpear con reivindicaciones progresivas, el sindicalismo ahora opositor pretende afianzarse como un actor político capaz de disputar las instituciones estatales y, si es necesario, forjar alianzas con partidos y sectores abiertamente conservadores. En este sentido, la táctica sindical de desgaste

²⁶ En la actualidad ese beneficio les llega sólo a quienes perciben salarios inferiores a los 5.200 pesos argentinos, unos 1000 dólares.

hacia el gobierno nacional, acompañada por una heterogénea gama de actores políticos que va desde organizaciones de izquierda radical hasta dirigentes sociales y políticos de derecha, cubren con un manto general de dudas la dirección política de esta compleja alianza que nació en 2012 y seguramente continúe articulando acciones contenciosas a futuro.

Tabla 2: Cronología de marchas y huelgas generales sindicales en 2012

27 de junio	Con un paro general y una marcha a Plaza de Mayo la CGT realizó por primera vez un acto opositor al gobierno. La huelga tuvo un débil impacto y la movilización convocó a 50.000 personas en Buenos Aires y otras miles en algunas ciudades del interior. Participaron de la marcha sindicatos, partidos menores de izquierda y algunos movimientos sociales. Las consignas explícitas fueron la eliminación del impuesto a las Ganancias; un aumento de las jubilaciones, un plan de viviendas y la universalización del subsidio a la asignación familiar de los trabajadores.
10 de octubre	Una jornada de paro y movilización convocada por la CTA opositora reunió entre 20.000 y 30.000 personas en Plaza de Mayo y provocó cortes de calles y accesos estratégicos a la ciudad de Buenos Aires. Adhirieron a la jornada algunos gremios de la CGT opositora (aunque no se plegaron al paro de la CTA), partidos políticos de izquierda, la cámara de pequeños propietarios agropecuarios “Federación Agraria” y partidos políticos de centroderecha.
20 de noviembre	Nueva jornada de huelga y movilización en todo el país con alto impacto en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y La Plata, ciudades en los que los bloqueos a los accesos pararon las actividades productivas. Los bloqueos (unos 300 en todo el país) se concentraron en la franja horaria de ingreso laboral (la mañana), lo que hizo que muchos trabajadores no pudieran llegar a sus trabajos, aunque no se adhirieran al paro. La gran mayoría de los cortes se levantó al mediodía, cuando era evidente el gran impacto de la medida de fuerza. En la ciudad de Buenos Aires hubo amenazas a transportistas para que no circularan y rotura de bienes a los dueños de bares del centro porteño para que cerraran sus puertas. Adhirieron a la medida la CTA y las dos CGT opositoras, Federación Agraria, Partidos de Izquierda y Partidos de

	<p>oposición. Éstos no formaron parte de la convocatoria, pero manifestaron su respaldo a la lista de reclamos, la cual incluía la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los salarios, la universalización de las asignaciones familiares y la devolución de fondos a las obras sociales sindicales, que retiene el Estado. Las fuerzas de centroderecha (el partido PRO, el peronismo disidente y un sector de la Unión Cívica Radical) se sumaron a los reclamos pero cuestionaron, sin embargo, la modalidad de las protestas.</p>
19 de diciembre	<p>Apelando explícitamente a la presencia de ciudadanos que asistieron a los cacerolazos previos, la CTA y las dos CGT opositoras organizaron una movilización en Plaza de Mayo con una convocatoria menor a la esperada. Las consignas de la marcha fueron el rechazo del Impuesto a las Ganancias, la extensión de las asignaciones familiares y el aumento a los jubilados, pero se sumaron otras como el reclamo por la inseguridad y la creciente inflación.</p> <p>Se sumaron a la medida de fuerza organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, así como partidos opositores de centro-derecha como sectores del radicalismo y del justicialismo no nucleado con el gobierno</p>

3) Conclusiones.

Comenzamos este trabajo interrogándonos sobre la caracterización de la conflictividad social en países gobernados hace ya varios años por gobiernos definidos como “progresistas”. Una de las hipótesis que repasamos afirmaba la disminución en los niveles de conflicto, provocada por la desmovilización de las organizaciones populares de estos países. Luego de haber pasado revista al desarrollo del conflicto social en los últimos años y de haber descrito sucintamente las principales acciones contenciosas de 2012 en Argentina, podemos abordar desde otro punto de vista aquellas cuestiones.

El año 2012 fue un año particularmente conflictivo en Argentina. El análisis de los actores protagonistas de acciones colectivas, las demandas que presentaron y su estrecha relación con las dinámicas de la política institucional nos permite observar una transformación *cualitativa* en las luchas sociales de los últimos años. Más allá del cambio en la intensidad contenciosa (que pudo

haber disminuido en relación a los álgidos años de principios de siglo), los conflictos de la Argentina contemporánea cambiaron en sus características principales. Se trata, entonces, de entender el *tipo* de conflictos desarrollados, más que de vislumbrar su cambio cuantitativo.

En ese sentido, cabe remarcar la transformación de los actores que hegemonizan el conflicto contemporáneo. A los conflictos “habituales”, protagonizados por organizaciones sociales populares que utilizan por excelencia el recurso de la acción colectiva, se sumaron esta vez movilizaciones y acciones contenciosas de actores que no suelen manifestarse, como los sectores medios y altos de los grandes centros urbanos. Estas “movilizaciones ciudadanas” fueron tan eficaces que superaron en protagonismo a las protestas de actores tradicionalmente contenciosos.

Por otra parte, la gran novedad del año pasado fue la presencia de acciones de lucha por parte de actores sindicales con tradiciones reivindicativas que cambiaron la orientación política de sus reclamos. Estos protagonizaron por primera vez en muchos años huelgas y movilizaciones con un carácter general, articulando entre distintos sindicatos de tradiciones políticas diversas y atacando frontalmente a un gobierno peronista.

Si bien se trata de conflictos claramente distintos, los cacerolazos y las acciones sindicales compartieron este año el hecho de presuponer una posición política fervientemente opositora. Ambas iniciativas contenciosas fueron acompañadas en las calles por miles de individuos que evidentemente se sintieron interpelados por los reclamos expresados.

Sin embargo, dichas protestas no lograron trascender las identidades sociales que las promovieron. En el caso de las protestas gremiales, éstas no convocaron a individuos por fuera de las organizaciones sindicales o políticas convocantes (como, por ejemplo, los sectores medios de la sociedad). Por otro lado, los cacerolazos no interpelaron a otros segmentos sociales (como las clases populares) y políticos (la población que votó al gobierno en las

elecciones de 2011). En síntesis, si bien las dos protestas son “antikirchneristas”, no comparten el perfil de los participantes: mientras que los cacerolazos apuntan a los sectores medios y altos “desafiliados”, que nunca se vieron interpelados por el gobierno; las protestas sindicales buscan hacer pie sobre el movimiento obrero organizado.

Precisamente, el hecho de que dos conflictos tan distintos (con actores, reivindicaciones y formatos evidentemente diferentes) compartan la misma orientación política refleja que buena parte de los conflictos sociales argentinos contemporáneos se desarrollan a partir del posicionamiento en torno al gobierno nacional; como si antes que las reivindicaciones puntuales los actores contenciosos ponderaran primero su posición con respecto al gobierno en la coyuntura nacional. Esto resulta evidente en el caso de la fracción de la CGT conducida por Hugo Moyano: mientras se mantuvo oficialista, los reclamos y los conflictos protagonizados por esos sindicatos (camioneros, judiciales, bancarios, etc.) no trascendieron nunca el ámbito laboral y, cuando lo hicieron, fue para defender al gobierno nacional ante la aparición de marchas opositoras. Sin embargo, cuando la lectura política de dicha fracción la alejó del gobierno, sus dirigentes hicieron un esfuerzo de articulación con sindicatos opositores y otros sectores (incluyendo el sector social que adhirió a los cacerolazos) para golpear todos juntos al gobierno nacional mediante huelgas generales, movilizaciones y otras medidas de fuerza.

Esta utilización del conflicto como herramienta de la lucha política se vio favorecida, además, por cierta crisis en la oposición partidaria argentina, caracterizada por una gran fragmentación, escasa legitimidad y una exigua representación social. En ese contexto, el malestar político con el gobierno de una fracción importante de la sociedad se ha desarrollado a través de la acción colectiva con atributos de protesta social, protesta que es fomentada e incluso organizada por estos mismos partidos incapaces de construir una alternativa político-institucional eficaz. Si la disconformidad de un sector de la sociedad no puede ser capitalizada por ningún partido opositor, la opción anti-kirchnerista es

sencillamente la construcción de un clima político que mine la legitimidad del gobierno.

En este sentido, más allá de las reivindicaciones puntuales (a las cuales podríamos caracterizar rápidamente como “regresivas” en el caso de los cacerolazos y “progresivas” en el caso de las huelgas obreras), ambos conflictos buscan socavar la gobernabilidad de Cristina Fernández favoreciendo la construcción de un clima de crisis de gobernabilidad²⁷, aunque sin tener la capacidad de articular una alternativa clara de gobierno, al menos hasta el momento. La ausencia de propuestas políticas claras en el bando opositor, por momentos, parece ir en este sentido ya que, como dice Edgardo Mocca, “si lo que se acerca de modo inminente es el caos, ¿para qué construir una propuesta política alternativa capaz de desarrollarse en forma gradual y de disputar el sentido común mayoritario de nuestra sociedad?” (Mocca, 2012).

Así, pues, como explicitamos en la introducción, estos conflictos sólo pueden entenderse en relación con los procesos políticos en el que se desarrollan (y a los que modifican constantemente) ¿Cómo entender, por ejemplo, las acciones contenciosas de buena parte del sindicalismo argentino sin comprender las rivalidades políticas al interior del movimiento peronista? ¿Cómo dar cuenta de la reacción ciudadana de los cacerolazos sin contextualizar la actualidad política de la oposición partidaria y el conflicto que mantiene el gobierno con los medios de comunicación concentrados?

En un escenario político en el que la protesta es el medio privilegiado de la oposición política y la ocupación del espacio público es una táctica muy utilizada por los sectores oficialistas, la disputa por “la calle” se ha exacerbado. Si la dinámica política argentina sigue dependiendo excesivamente de la movilización callejera, los años venideros serán particularmente conflictivos. Esto puede redundar, sin lugar a dudas, en un fortalecimiento de la

²⁷ En los últimos días del año 2012, por ejemplo, se produjeron saqueos coordinados en varias ciudades del país, alejadas entre sí. Si bien estos hechos se producen a partir de las carencias de un sector importantísimo de la población, es innegable que son instigados por grupos que intentan desestabilizar el clima político argentino.

participación ciudadana y la democracia. Sin embargo, esto depende del grado de responsabilidad con que los principales dirigentes nacionales (y la sociedad toda) recurran a esta herramienta legítima.

Bibliografía.

- ACCORINTI, Sabrina; Gurvit, Julieta; Maloberti, Cecilia; Manzanelli, Pablo; Palombi, Ariel y Ventrici, Patricia
(2008) "A cara descubierta: protestas patronales en la Argentina post-convertibilidad", mimeo.
- AUYERO, Javier,
(2002) "Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina" en *Desarrollo económico*, Vol. 42, No 166 (Jul-Sept), Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires.
- CASTELLS, Manuel,
(2012) "Prefacio. Autocomunicación de masas y movimientos sociales en la era de Internet" en Aguilar, Salvador (ed.) *Anuario del Conflicto social 2011*, Universidad de Barcelona.
- DILLENBERGER, Diego
(2012), "Las redes sociales y el 13-S: ¿la TV no tuvo nada que ver?", *El Cronista*, 21 de noviembre de 2012.
- EQUIS
(2012), "Sondeo de opinión pública sobre temas de coyuntura. Informe flash: Principales aglomerados urbanos de la República Argentina". Noviembre.
- ETCHEMENDY, Sebastián y Collier, Ruth
(2007): "Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo en Argentina (2003-2007)", en *Politics and Society*, Vol. 35, Nº 3.
- FÉLIZ, Mariano,
(2011) "¿Neo-desarrollismo: más allá del neoliberalismo? Desarrollo y crisis capitalista en Argentina desde los 90", *Theomai*, Nº 23, Primer Semestre, Universidad Nacional de Quilmes.
- GRAÑA, Juan M; Kennedy, Damián y Valdez, Jimena
(2008): "El modelo de la post-convertibilidad: contenido, límites y perspectivas" en *II Jornadas de Economía Política*, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 10 y 11 de noviembre.
- GRAÑA, Juan M. y Kennedy, Damián,
(2009): *Salario real, Costo laboral y productividad Argentina 1947-2006: análisis de la información y metodología de la estimación*, CEPED, Buenos Aires.
- KATZ, Claudio,
(2006), "Socialismo o neodesarrollismo", en línea: <http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1135> [consultado el 22-01-2013].
- KOLLMAN, Raúl
(2012): "De clase, organizada, sin impacto electoral", en *Página 12* (Noviembre).
- LEVITSKY, Steven,
(2003): *Transforming Labor-Based Parties in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MANEIRO, María y Mera, Carolina (coord.)
(2011), "Conversaciones entre Horacio González, Juan Carlos Marín, Emir Sader, Svampa, Maristella y Tapia, Luis. Experiencias de gobierno y procesos emancipatorios en la América Latina reciente" en *Argumentos. Revista de Crítica Social*. Selección de conversaciones
- MENGO, Renee
(2009), "Regímenes progresistas de América Latina" *Jornadas del área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina: Las Relaciones Internacionales: una disciplina en constante movimiento*. 1, 2 y 3 de octubre, Buenos Aires.

- MERKLEN, Denis,
(2005): *Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, Editorial Gorla, Buenos Aires.
- MOCCA, Edgardo,
(2012), "Parodias políticas" en *Página 12*, 23 de diciembre de 2012.
- MODONESI, Massimo,
(2012): "Entre desmovilización y removilización. Consideraciones sobre el estado de las luchas populares en el marco de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos durante 2011", en Aguilar, Salvador (ed.): *Anuario del Conflicto social 2011*, Universidad de Barcelona.
- MUÑOZ, María Antonia,
(2010), *Sísifo en Argentina: orden conflicto y sujetos políticos*, Plaza y Valdés - Eduvim, México.
- REBÓN, Julián,
(2009): "Acción directa y procesos emancipatorios" en Biagini, Hugo E y Roig Arturo A. (directores): *Diccionario del pensamiento alternativo II*, Universidad de Lanús.
- REBÓN, Julián; Antón, Gustavo; Creto, Jorge y Salgado, Rodrigo,
(2010), "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina" en *OSAL*, Año XI, N° 28, noviembre, CLACSO Buenos Aires,.
- SCHUSTER, F., Pérez, G., Pereyra, S., Armesto, M., Argelino, M, García, A., Natalucci, A., Vázquez, M., Zipcioglu, P.,
(2006), *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*, Documentos de Trabajo No. 48, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- VARESI, Gastón,
(2010), "La Argentina post-convertibilidad en el contexto de la crisis mundial" en Gambina, Julio (comp.), *La crisis capitalista y sus alternativas: una mirada desde América Latina y el Caribe*, CLACSO, Buenos Aires.